0211

AUTOS: “BERRIEL SATTAMINO, GUSTAVO SIUL C/ PODER LEGISLATIVO Y OTROS -ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD -ART.13 DE LA LEY 19.574” - FICHA 1-167/2018.-

Suprema Corte de Justicia:

1) En autos surge que el accionante, de profesión Escribano, fue sancionado al pago de una multa equivalente a U.I. 368.128 por incumplimiento de las obligaciones previstas para los sujetos comprendidos en la normativa de prevención del lavado de activos. Es entonces que incoa el presente planteamiento de inconstitucionalidad, en referencia expresa al art. 13 de la ley 19.574.

La disposición atacada -en aquello que fuera impugnado- preceptúa lo siguiente:

“El incumplimiento de las obligaciones previstas para los sujetos obligados por el presente artículo determinará la aplicación de sanciones por parte de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

“Dichas sanciones se aplicarán apreciando la entidad de la infracción y los antecedentes del infractor y consistirán en apercibimiento, observación, multa o suspensión del sujeto obligado cuando corresponda, en forma temporaria, o con previa autorización judicial, en forma definitiva.

Las suspensiones temporarias no podrán superar el límite de tres meses.

El monto de las multas se graduará entre un mínimo de 1.000 UI (mil unidades indexadas) y un máximo de 20.000.000 UI (veinte

millones de unidades indexadas) según las circunstancias del caso, la conducta y el volumen de negocios habituales del infractor.

El Poder Ejecutivo establecerá los plazos, la forma y las condiciones en que se deberá dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en este artículo.”

A su respecto, el accionante indica como violentados el derecho al trabajo y el derecho de propiedad, así como el principio de igualdad; en tal sentido, señalase, en lo medular, que al ordenar la graduación de la sanción en vía administrativa “... *la ley incurre en un vacío regulatorio que la vuelve inconstitucional y que termina por defecto habilitando a la reglamentación a determinar la afectación del “volumen de negocios habituales” en la cuantía de una sanción*”(el destacado no figura).

Asimismo, afirma que la razón por la cual se prevé una multa mayor en caso de verificarse un mayor volumen de negocios, tiene por objeto “... *un mero afán recaudatorio independiente de la gravedad del hecho*”, siendo que dicha variable sólo acreditaría su constrictión al trabajo y su prestigio profesional, pero no la gravedad de la infracción que eventualmente se le impute.

En cuanto al principio de igualdad que se dice afectado, se agravia en tanto no existe proporcionalidad en la sanción, dado que “...*una misma conducta cometida puede ser sancionada de forma más gravosa o menos, según la categoría de ingresos en que se ubique el infractor...*”(su esc., fs.20 vto).

2) Como viene de transcribirse, los agravios versan, en concreto, en lo que califica de una inconstitucional atribución de potestades sancionatorias a la Administración, y de una presunta desigualdad ante la ley y afectación del derecho al trabajo , por cuantificar aquellas multas en función del volumen que adquiera la intervención profesional.

Y bien : los agravios no son de recibo, por cuanto se dirá:

En referencia a la atribución de facultades sancionatorias a organismos de la Administración pública, ello forma parte del derecho administrativo “sancionador”, y es absolutamente constitucional en la medida que una ley válida y eficaz asigne tal potestad y delimite la esfera de potestades atribuidas, de modo tal que no quede librado al arbitrio de la Jerarquía. Es más, dicha facultad -que es dada por la norma jurídica en casos concretos- es necesaria para asegurar el cumplimiento de los fines y las metas estatales, en tanto viabilizan, con debido fundamento legal, las posibilidades de contralor del cumplimiento de las obligaciones que determinadas normas establecen o ponen de cargo de los administrados.

3) En el caso de autos, además, se trata de normas fundamentadas en el *orden público*, en tanto la finalidad última del ejusdem es controlar y limitar todos aquellos instrumentos facilitadores del lavado de activos, disponiendo obligaciones funcionales de cargo de los operadores del sistema (en autos: los profesionales Escribanos) que en razón de su título habilitante pueden ser utilizados como medios para materializar la conducta ilícita, v.gr. a través del otorgamiento de escrituras públicas que involucren bienes de elevado valor comercial. Si bien es verdad que el “volumen de

trabajo” del profesional actuante es tomado como parámetro que incrementa el monto de la sanción pecuniaria, ello no obedece a ninguna intencionalidad del legislador de desconocer el principio de igualdad de las personas ante la ley, sin de *desalentar conductas displicentes* ante la norma sancionatoria, dado que un alto nivel de ingresos puede tornar menos relevante o eficaz -como método disuasivo- el pago de la multa generada.

4) Por último, no existe afectación del derecho al trabajo - tal y como lo denuncia la accionante- en tanto la multa generada no es directa consecuencia del monto de su salario promedio mensual ni del nivel de ingresos derivados de su labor profesional, sino *por el incumplimiento* de las obligaciones establecidas en la normativa impugnada, por lo que no se grava su poder adquisitivo ni se incrementa la sanción por su status laboral, sino, como fuere señalado *ut supra*, opera a modo de disuación o desestímulo de la contravención que fuere verificada.

Por los fundamentos expuestos, esta Fiscalía estima que el accionamiento en vista no podrá prosperar, correspondiendo su **rechazo.-**

Montevideo, 29 de abril de 2019.-

MA/ma/sa

Dr. Jorge Díaz Almeida
Fiscal de Corte y Procurador
General de la Nación